

AGENCIAS DE LOS EE.UU. INVOLUCRADAS EN LA ESTERILIZACIÓN FORZADA DE LOS POBRES DEL PERÚ

The Wanderer, 5 de marzo de 1998¹

En medio de evidencias crecientes de los esfuerzos coercitivos del gobierno peruano respecto al control de la población y campañas de esterilización, la Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA) ha pedido que el gobierno de los EE.UU. retire su apoyo financiero de los llamados programas de planificación familiar, que han dado lugar a muertes y lesiones de mujeres peruanas, sobre todo en zonas muy pobres del país.

Daniel Zeidler, director de la oficina en los EE.UU. de la Alianza Latinoamericana para la Familia -organización de apoyo internacional- dijo el mes pasado, a raíz de sus propias investigaciones en el Perú: *“El programa de población del Perú viola gravemente los derechos humanos al presionar y coaccionar a las mujeres pobres para que se esterilicen”*.

“Abundan informes y testimonios sobre mujeres a las que se ofrecen alimentos a cambio de aceptar ser esterilizadas. Los trabajadores de salud están presionando para alcanzar las metas de esterilización del gobierno. Las mujeres son esterilizadas sin su consentimiento o sin pleno conocimiento de las consecuencias”.

Muchas mujeres han muerto a consecuencia de los procedimientos de esterilización. Otra se quejan de que después de recibir una esterilización gratuita sufren graves complicaciones médicas, que muchas veces no son tratadas, o frente a las cuales los representantes del mismo sistema de salud que les dio la esterilización gratuita les dice que tienen que comprar medicamentos costosos, que no pueden costearse.

Los expertos médicos han declarado que las muertes y las complicaciones se deben principalmente a las malas condiciones sanitarias y médicas en las que esas operaciones se realizan.

¹ Texto disponible en <http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=292> (revisado el 27 de mayo del 2010). Traducción de Ricardo Alvarado Portalino.

Feministas y líderes campesinos, así como la Iglesia Católica y líderes de derechos humanos en el Perú han denunciado los agresivos programas estatales de “*control poblacional*” dirigidos a las madres pobres, analfabetas y jóvenes.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo, prestigiosa entidad peruana de derechos humanos, reconoció la validez de los abusos, y exhortó al gobierno de Alberto Fujimori a reformar de inmediato el programa. El gobierno peruano ha negado la existencia de una campaña de esterilización y ha minimizado las complicaciones, pero indicó que hará cambios si es necesario.

El Congreso está ahora investigando la participación del financiamiento de los EE.UU. en los programas de control poblacional del Perú. Joseph Rees, jefe de la Subcomisión de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, acaba de regresar del Perú, después de una misión de investigación realizada en enero. Rees se reunió con líderes feministas, líderes de derechos humanos, líderes religiosos y líderes del gobierno, y entrevistó a algunas víctimas. En su informe oficial a la Subcomisión, fechado el 10 de febrero de 1998, Rees critica la participación de USAID en el Programa de Planificación Familiar del Perú, y recomienda que los EE.UU. “*suspendan toda la ayuda monetaria directa a los Programas de Planificación Familiar del Perú hasta que esté claro que se han detenido las metas y los abusos relacionados a ellas, y que no serán reasumidas*”.

El informe también pide que los EE.UU. “*discontinúen la ayuda en especies*” que pueda directa o indirectamente facilitar las campañas de esterilización, y desvincularse “*públicamente*” de las campañas.

Daniel Zeidler invocó a todos los interesados en los derechos humanos a contactar al Congreso y al Presidente para urgirlos a denunciar públicamente estos abusos al gobierno del Perú y suspender inmediatamente el financiamiento de población de los EE.UU. a ese país.

Entre los casos documentados por ALAFA están:

- Juana Gutiérrez Chero de La Quinta, Piura, Perú, que murió en su casa aproximadamente diez horas después de ser esterilizada. De acuerdo con testimonios de su esposo grabados en vídeo, ella no quería ser esterilizada, pero los trabajadores de salud fueron a su casa varias veces para animarla a que se

someta al procedimiento. Una vez, ella incluso se escondió de los trabajadores. Fueron a buscarla un día, después que su marido salió a trabajar, y la esterilizaron. Cuando su esposo volvió del trabajo, la encontró muy enferma y en cama; fue al centro de salud para conseguir ayuda, pero no había nadie allí. Juana murió esa noche en su casa, después de las 2 a.m.

- Celia Ramos Durand, de La Legua, que murió dos semanas después de someterse a una esterilización, que tanto ella como su marido consintieron después que le dijeron que era una operación simple. Según su familia, cuando ella no regresó a casa, fueron a buscarla al centro de salud y se les dijo que había sido trasladada a un hospital. La familia se enteró que había caído en coma como consecuencia de la operación.
- Magna Morales Canduelas, de Tocache, que murió poco antes de la Navidad de 1997, 12 días después de ser esterilizada.
- Alejandrina Tapia Cruz, de Cajacay, que también murió en diciembre pasado, una semana después de una esterilización.
- Reynalda Betalleluz, de Huamanga y Josefina Vázquez Rivera, de Paimas, las cuales murieron un día después de haber sido esterilizadas.
- Victoria Espinoza, de Piura, que fue esterilizada después de una cesárea, sin su consentimiento. Su bebé también murió.

Los medios de comunicación del Perú se han centrado en estas atrocidades financiadas por los contribuyentes de los EE.UU., y numerosos artículos de prensa documentan una variedad de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, es común que se ofrezcan esterilizaciones gratuitas a las mujeres, pero cuando ocurren complicaciones, a estas mujeres pobres se les dice que deben pagar por sus medicamentos.

En algunos casos, los trabajadores médicos del gobierno ofrecen a las mujeres alimentos a cambio de las esterilizaciones. En el caso de Ernestina Sandoval Sullana, ella fue informada por los agentes de salud que podía conseguir comida gratis por acudir a un hospital local. Cuando llegó, le dijeron que tenía que ser esterilizada a fin de recibir la comida. Ella se negó. Se le dijo que podía obtener los alimentos por un mes, pero que el próximo mes no debía volver, a menos que se esterilizara.

El gobierno también está condenando a la hambruna a los niños como una manera de coaccionar a sus madres para aceptar la esterilización. María Emilia Mulatillo, de Sullana, contó que su hija de dos años de edad participaba en un programa de alimentos del gobierno, pero después de unos 2 meses, se le dijo que ella debía ser esterilizada. Cuando se negó, su hija fue dejada fuera del programa de alimentos del gobierno.

Otra táctica adoptada por el gobierno es obligar a las mujeres a ser esterilizadas después del parto, antes de salir del hospital.

Blanca Aguirre Zapata, de Sullana, informó que después del parto, le dijeron que tenía que usar algún tipo de anticoncepción. Ella dijo que no quería nada, pero le pusieron una inyección cuando estaba durmiendo. Más tarde le dijeron que era para el control natal. Su testimonio está en vídeo.

El manual gubernamental peruano “*Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000*” exige 100% de uso de anticonceptivos por las mujeres que acaban de dar a luz.

Son comunes las acusaciones de que los trabajadores de salud van casa por casa, y luego de vuelta, y de vuelta nuevamente para impulsar la esterilización.

Los trabajadores de salud son presionados para lograr los objetivos. Algunos trabajadores de salud recibieron 15-30 soles (6-12 dólares estadounidenses) por cada mujer esterilizada, de acuerdo con Giulia Tamayo, de la organización feminista Flora Tristán.

Cobertura masiva

En las últimas semanas (mediados diciembre 1997-mediados enero 1998), han habido 16 artículos en un solo periódico, El Comercio, el principal periódico del país. Otros diarios importantes también hicieron una cobertura significativa.

Selección de titulares del periódico *El Comercio*: “*Enfermeras engañan a mujeres con el fin de esterilizarlas*” (26 de enero de 1998), “*Viudos fueron pagados para no denunciar las muertes de sus esposas esterilizadas*” (24 de enero de 1998), “*Mujer hospitalizada durante tres meses debido a infección causada por la esterilización*” (24 de diciembre de 1997), “*Esterilizan mujer que tenía un mes de embarazo*” (23 de diciembre de 1997), “*Mujer recibió ropa para sus hijos a cambio de esterilización*” (23 de diciembre de 1997); “*Utilizan programas alimentarios para obtener mujeres a ser*

esterilizadas” (20 de diciembre de 1997), “*Hijos de mujer que murió después de ligadura de trompas están en total abandono*” (19 de diciembre de 1997): “*Magna Morales no estaba segura, pero los alimentos donados la convencieron*” (19 de diciembre de 1997; Morales murió 12 días después de su esterilización).

La cobertura internacional del programa del presidente Fujimori financiado por Estados Unidos ha sido presentada por: Le Monde, France Presse, The Miami Herald, Radio Nederland y la BBC.

Desacuerdo oficial

La Defensoría del Pueblo emitió una declaración el 27 de enero de 1998, que reconoce graves problemas en el programa de esterilización del gobierno, tales como:

- a) falta de garantías para la libre elección,
- b) tendencias coercitivas en la aplicación del programa;
- c) campañas dirigidas exclusivamente a esterilizaciones,
- d) cuotas establecidas de mujeres que deben utilizar ciertos métodos anticonceptivos,
- e) falta de seguimiento después de la cirugía.

El informe completo se publicó en *El Peruano* el día 27 de enero 1998, y está disponible en Internet (en español) en

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_7.pdf²

² Dirección de Internet actualizada al 27 de mayo del 2010.